



TEXTO

Hace unos años, asistí en una clase de un Máster a la ardorosa defensa realizada por una alumna de su libertad a obtener de Internet sin pagar todos los productos culturales que su habilidad y su tecnología le permitieran. Ante el asombro de sus compañeros y del mío propio, aducía el derecho de cada uno a la cultura para justificar el pirateo, que no lo llamaba así porque la apropiación online de cualquier contenido –libro, película, música, periódico...– no la consideraba indebida sino todo lo contrario. No hubo manera de convencerla de la ilicitud de ese procedimiento. Sin embargo, el derecho de propiedad intelectual (es el autor quien decide soberanamente sobre la difusión de su obra) es un límite evidente, incuestionable, decisivo para disponer de una obra ajena porque ante el derecho de propiedad intelectual, tal como está contemplado en la ley, decae el derecho a la información, salvo en casos precisos justificados por el interés general o previa conformidad del autor.

Ignoro si, ya profesional de la información, aquella alumna ha rectificado su criterio, al menos ante el hecho de elaborar con su trabajo productos culturales de los que otros pueden lucrarse con las facilidades tecnológicas a su alcance. Pero el recuerdo de su alegato en favor de sacar provecho del esfuerzo ajeno desde el elevado estadio académico de un Máster me ha servido desde entonces para ejemplificar lo extendida que está entre nosotros la falta de consideración a la propiedad intelectual y la consiguiente violación de las normas que tratan de protegerla. Ahora tenemos detalles que confirman el formidable alcance del robo informático de trabajos culturales en nuestro país. Por ejemplo, un estudio realizado por GfK para la Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos, fundada por varias asociaciones profesionales para defender la propiedad intelectual, ofrece datos de un verdadero expolio producido el año pasado en España: 43 de cada 100 internautas piratean películas; 32 de cada 100 piratean música; 12 de 100, libros; 7 de 100, videojuegos.

Eso, traducido a números revela que se realizaron 3.049,6 millones de descargas ilegales, cuyo valor en millones de euros fue de 15.204,7. El lucro cesante para las empresas por esta práctica (dado que los contenidos descargados en su mayoría no son consumidos) se calcula en 1.220,6 millones. Si los internautas hubieran pagado el precio de lo acaparado, las arcas públicas habrían recibido 494,7 millones de euros en impuestos y en cotizaciones a la Seguridad Social, ya que sin ese expolio la industria de contenidos en España podría haber creado 24.766 puestos de trabajo directos, dice el informe, lo que supondría para el empleo del sector un incremento del 43,1 %.

Los argumentos de la alumna del Máster no son insólitos entre los piratas informáticos: nada menos que el 32 % alega que la piratería es un "derecho del internauta". En este escenario de déficits éticos, no falta quien muestra ignorar el alcance de su práctica: el 31% asegura creer que no está haciendo daño a nadie, el 17% pretende que no está perjudicando a ninguna industria y el 18% se escuda en que no hay consecuencias legales, que no le pasa nada al que se apropia de contenidos propiedad de otros. La sensación de este 18% es plenamente real porque la lucha contra la piratería en España está coronada por el fracaso. La Comisión de Propiedad Intelectual, creada hace un año a raíz de la llamada ley "Sinde", por el nombre de la anterior ministra de Cultura, para luchar contra las descargas ilegales, ha resuelto 30 de las 363 solicitudes que ha recibido. El número de las demandas ha sido ridículo en comparación con los millones de accesos ilegales registrados. Lo menos que se puede deducir de ello es la desconfianza de las víctimas del pirateo en la gestión administrativa pensada para defenderlas.

No es extraño que nuestro país corra serio peligro de verse destacado por esta forma de saqueo en Internet. La Alianza Internacional de Propiedad Intelectual, que reúne a industrias de contenido en EEUU, ha pedido a su Gobierno que vuelva a incluir a España en la "Lista 301" de países piratas, de la que salió hace un año. Mal liderazgo es éste. Pero tenemos muchas posibilidades de volver a recibir tan indeseada distinción

CUESTIONES

1. Señale el tipo de relación semántica que existe entre las siguientes palabras o expresiones (subrayadas en el texto). Razone la respuesta:
 - a) Entre la palabra *expolio* y la palabra *saqueo* (0,5 puntos).
 - b) Entre la expresión *productos culturales* y las palabras *libro*, *película*, *música*, *periódico* (0,5 puntos).
 - c) Entre las palabras *piratas*, *piratería* y *pirateo* (0,5 puntos).
2. Indique el tipo de conexión que se establece entre los siguientes enunciados del segundo párrafo; extraiga los correspondientes conectores y señale la función textual que se cumple en cada caso (1,5 puntos):
 - a) Entre los enunciados 1º y 2º (0,75 puntos).
 - b) Entre los enunciados 3º y 4º (0,75 puntos).
3. Enuncie la tesis o macroestructura global del texto (1,5 puntos: 0,5 solo asunto; 1,5 tesis).
4. Elabore un resumen del texto de acuerdo con las pautas establecidas. Solo se hará constar la segunda fase de reverbalización (2,5 puntos).
5. Atendiendo a las pautas establecidas, elabore un comentario crítico acerca del asunto tratado en el texto (3 puntos).